



EDITORIAL

En pocos años ha habido un crecimiento espectacular de las universidades de los países de cultura catalana. Si nos fijamos en Cataluña, hemos pasado de tres universidades en 1990 a ocho universidades en 1993. En Valencia y en las Islas Baleares, observamos también procesos de crecimiento y renovación. Aparecen obras notables de arquitectura universitaria y, especialmente, equipos rectorales con una dinámica sorprendente. El Gobierno de Cataluña ha creado un ministerio especial para universidades e investigación, y está dirigiendo recursos económicos considerables a los planes de expansión universitaria. La sociedad catalana se ha caracterizado históricamente por la confianza en el sistema educativo, como motor de desarrollo económico y político. En un país sin riquezas naturales relevantes, hay que confiar en la calidad del trabajo como elemento fundamental del progreso. Actualmente, son las universidades las encargadas de asegurar una preparación profesional de alta calidad. En el contexto europeo y mediterráneo, entendemos que un buen profesional no es sólo un buen técnico, sino que esperamos que sea una persona culta, interesada por la vida pública, arraigada en una tradición y abierta a los desafíos internacionales. Por esta razón, nos preocupan algunas de las tendencias dominantes en los sistemas educativos de las sociedades tecnológicamente avanzadas, cuando se encargan unilateralmente de la formación especializada, pero no insisten lo bastante en la educación global. Nos gustaría que la educación, en la perspectiva del siglo XXI, lograra inscribir la formación científica y técnica en un marco de valores que permitiera diseñar sociedades más libres y más solidarias. Los jóvenes son sensibles al nihilismo de la civilización tecnocrática. También se escandalizan ante los aspectos perversos de un orden económico en el que el beneficio parece ser la razón prioritaria de todas las decisiones. Las democracias serán débiles si pactan con el nihilismo o si mercadean con los valores. Las universidades catalanas, como todas las universidades, deberían combatir en favor de un saber compatible con la responsabilidad, favorable a la paz, abierto a la comprensión de las demás culturas, lúcido ante la problemática ecológica y generador de nuevas formas de participación democrática, en el contexto de los poderosos sistemas contemporáneos de dominación. Esta vía puede evitar la aparición de las corrientes totalitarias o neofascistas que amenazan a distintos países europeos, como el nuestro. En el caso de la nación catalana, las universidades tienen que contribuir a defender la cultura y la lengua catalanas, más allá de las consideraciones puramente utilitarias. Es evidente que la utilización de la lengua catalana en las universidades complica la integración de los estudiantes que sólo conocen la lengua española. Pero las universidades catalanas no pueden renunciar a servir a la cultura de una nación que afirma su derecho a la autodeterminación, ni a compartir, sin discriminaciones, las responsabilidades de la construcción europea y de la solidaridad universal.